Birmania: la política de la conservación --la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre

El Consejo de Estado por el Desarrollo y la Paz (SPDC) es una de las dictaduras militares más brutales del mundo. La Organización Internacional del Trabajo de la ONU describe el trabajo forzado en Birmania como un “crimen contra la humanidad”. Cerca de un millón de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras. El Ejército de Birmania, el Tatmadaw, recurre a la violación como arma contra mujeres y niños indígenas, y recluta niños como soldados. El 6 de julio de 2005, la junta de Birmania liberó a más de 240 personas, muchas de ellas prisioner@s políti@s, pero todavía quedan un@s 1.400 más en prisión. La tortura es una práctica rutinaria. La mitad del presupuesto nacional va a parar a los militares. Birmania no está en guerra con ninguna otra nación. La junta está en guerra con su propio pueblo.

En 1990, la Liga Nacional por la Democracia, de Aung San Suu Kyi, obtuvo más del 80% de las bancas parlamentarias. La junta no permitió que la Liga asumiera el poder; en total, a partir de 1989, Aung San Suu Kyi ha estado detenida durante casi diez años.

Desde 1988 algunos Estados miembros de la Unión Europea han comerciado con Birmania e invertido en este país; dichos negocios ascienden a US$ 4.000 millones. El principal inversor extranjero en Birmania es Total Oil Company; el gobierno de Francia es propietario parcial de esta empresa.

Para la construcción de gasoducto de Yadana, Total y la petrolera estadounidense Unocal contrataron al Ejército birmano para la seguridad del proyecto. EarthRights International ha documentado el desalojo forzado de las aldeas para limpiar el terreno del gasoducto y conseguir mano de obra forzada para construirlo.

Las empresas niegan estas acusaciones. El informe sobre responsabilidad social de la empresa publicado por Total en 2004 defiende sus inversiones en Birmania: “Creemos que nuestra presencia tiene beneficios positivos y duraderos para Myanmar [Birmania] y colabora en los avances en materia de derechos humanos en la región en que actuamos”.

Parte de los ingresos que la junta recibe del gas se destina a armamento. John Jackson, de la ONG británica Burma Campaign, dijo recientemente al periodista John Pilger que no conocía un solo funcionario de la Unión Europea que negara que la inversión extranjera y el gasto militar están íntimamente ligados. “La misma semana que recibió su primer pago por el gas que iba a enviarse a Tailandia desde un yacimiento gasífero operado por Total Oil, el régimen hizo un pago inicial de US$ 130 millones por diez aviones caza MiG-29”, dijo Jackson.

Por supuesto que el informe de Total sobre la responsabilidad social de la empresa no menciona ningún detalle embarazoso, como ser la brutalidad de los militares birmanos.

La supervivencia de la junta de Birmania depende de la permanente explotación del ambiente del país. La mayor parte de los ingresos del régimen proviene del madereo, la pesca y las concesiones

de minería. El resultado ha sido el desmonte de grandes superficies de bosques.

En un artículo publicado recientemente en Nature, el periodista Duncan Graham-Rowe analiza algunas de las cuestiones éticas con las que se enfrentan las organizaciones conservacionistas de Birmania. El periodista entrevistó a Alan Rabinowitz, director de ciencia y exploración de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), una ONG con sede en el zoológico Bronx de Nueva York. Hace más de diez años que Rabinowitz viene trabajando en Birmania; también ha colaborado en el establecimiento de la Reserva del valle Hukaung, la mayor reserva de tigres del mundo, que abarca más de 20.000 kilómetros cuadrados.

El trabajo de la WCS en Birmania no sería posible sin la aprobación de los jerarcas del régimen. Quizá no debería sorprender que Rabinowitz no se muestre dispuesto a criticar a la junta birmana. “Creo que se infló fuera de toda proporción”, expresó a Graham-Rowe refiriéndose al espantoso historial del régimen en cuanto a derechos humanos. “Las personas que fueron desplazadas de Birmania conforman un grupo inteligente y culto que ha sabido mantener una gran presión”, explicó Rabinowitz.

Rabinowitz reconoce alegremente que la vida silvestre le interesa más que la política. “No encuentro tan atractivo el mundo de las personas”, declaró a la revista The Irrawaddy, publicada por birmanos en el exilio. “Para mí la política, sin importar cuál gobierno esté en el poder, no es más que una partícula de tiempo. No estamos haciendo esto por usted o por mí o por el presente, sino por el futuro lejano”, añadió.

Para las personas que han sufrido el terror de la junta de Birmania, la política seguramente significa algo más que una partícula de tiempo. Un informe reciente de Human Rights Watch, que lleva por título "'They Came and Destroyed Our Village Again': The Plight of Internally Displaced Persons in Karen State" [“Vinieron y volvieron a destruir nuestra aldea: la difícil situación de los desplazados internos en el estado de Karen”] documenta las atrocidades. “Cuando los soldados del Tatmadaw entraron en mi aldea mataron a los hombres y golpearon a las mujeres que atrapaban”, dijo a Human Rights Watch una habitante de Karen, más precisamente de la aldea Thwa Hta, en el distrito de Papun. Otra mujer de Karen relató: “Los soldados birmanos volvieron a atacarnos en Htee Hto Kaw Kee, en 1992. A mi marido le dispararon y lo mataron, e hirieron a otros aldeanos. Los soldados quemaron nuestras casas y mataron a nuestros animales y se los comieron. También quemaron nuestro granero de arroz, destruyendo 190 latas de arroz. También mataron a mi yerno, que simplemente estaba recogiendo nueces en el bosque. Él tenía hijos pequeños".

Aunque la WCS no está trabajando en el estado de Karen, sí está trabajando en el mismo país y con el mismo régimen militar. La WCS no es responsable directa de las atrocidades contra los derechos humanos, pero la destrucción de los bosques de Birmania no está ocurriendo en un vacío político. Al ignorar el régimen asesino con el que está trabajando, la WCS está en efecto legitimándolo y ayudándolo a lograr credibilidad internacional.

Por Chris Lang, correo electrónico: http://chrislang.org